

México en el giro de tuerca imperial. La economía política de la llamada Cuarta Transformación

Mateo Crossa

En 2018, en un contexto de absoluto descontento social frente a la profunda ofensiva que por años se produjo en México, AMLO hizo campaña presidencial por tercera ocasión anunciando un gobierno que pondría fin al neoliberalismo en el país. Al ganar las elecciones anuncio pomposamente que, con su dirección, el neoliberalismo se había terminado, entendiéndolo errónea o deliberadamente que el neoliberalismo se limitaba en gran medida a las prácticas corruptas de algunos agentes y funcionarios estatales, sin ver (o sin querer ver) que el TLCAN renovado (ahora llamado TMEC), que su gabinete han apoyado sin cuestionamiento alguno, se erigió enteramente sobre políticas y programas de plena apertura neoliberales.

Desde su inicio en la gestión presidencial asumió algunas funciones como programas sociales o elevación del salario mínimo que si bien podrían parecer interesantes, han resultado profundamente limitadas. Con respecto a apoyo federal general para los programas sociales, el presupuesto de 2021 (4,2 por ciento del PIB) fue considerablemente más bajo que el nivel de financiamiento del 5,3 por ciento de 2014 (Jaramillo-Molina 2021). Y con respecto al aumento del salario mínimos, las cifras no son alentadoras: La agresión de las últimas cuatro décadas fue tan desgarradora, que a pesar de que el salario mínimo se ha duplicado desde 2018, sigue siendo el más bajo del continente, tan sólo después de Haití. A esto se agrega que la brecha de ingresos en el país sigue aumentando y la población trabajadora que recibe menos de un salario mínimo crece inusitadamente, al haber pasado de 8.4 millones de personas, en 2018, a 19 millones, en 2022. Esto significa que al día de hoy, 35% de toda la población ocupada de México recibía un ingreso que no rebasaba 7,200 pesos mensuales (aprox 350 dolares mensuales). Muchos millones de estas personas que se encuentran en la informalidad no reciben ni siquiera esa cantidad. Las cifras del CONEVAL también ilustran la gravedad del problema: según datos de esta entidad, un sorprendente 38,8 por ciento de la fuerza

laboral recibió una compensación tan baja que les negó el acceso completo a lo que se conoce como “canasta básica”, el poder adquisitivo mínimo necesario para mantener la existencia física (CONEVAL 2022b). Otras fuentes (por ejemplo, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara) cuestionan la medida de CONEVAL, argumentando que el pago de tres salarios mínimos constituye el nivel en el que un trabajador puede proveer para su subsistencia.

Entonces, no han sido los aumentos de salario lo que ha permitido palear de manera muy limitada la honda crisis por la cual atraviesa la economía mexicana. Lo verdaderamente importante para entender el ingreso de la clase trabajadora en el país son las remesas que llegan a México de los millones que fueron efectivamente expulsados de su propia tierra por la “mano invisible” de las fuerzas del mercado. De hecho, parece casi increíble que para 2021 las remesas equivalieron al 70 por ciento de toda la “factura salarial” en México (Villanueva 2022a: 20). Es decir, que las remesas equivalieron a casi tres cuartas partes de todos los ingresos anuales combinados de toda la clase trabajadora radicada en el país.

La historia se recruce aún más cuando se observa que en el mar de pobreza salarial que se extiende por el país, las fortunas de los multimillonarios aumentan vertiginosamente, a pesar de los agresivos estragos que ha causado la pandemia y la inflación . Slim, Larrea, Salinas Pliego, Bailleres, etc, aparecen entre los nombres de las familias multimillonarias que, según la CEPAL, han visto acrecentar su riqueza en al menos 31.2% desde inicios del 2020. De igual manera, el sector de la banca dominado por un puñado de grandes consorcios trasnacionales incrementó sus utilidades en 67 por ciento durante el año 2021.

La nueva versión de la transformación encabezada por AMLO no constituye ni de cerca un desafío al esquema centrado en el mercado de que comenzaron impulsando Salinas y su séquito. La política económica se sigue centrando en gran medida en los flujos y reflujos de la IED, mientras la presidencia se aferra, respondiendo claramente al interés de los capitales estadounidenses, a una

estructura de internacionalización ‘asimétrica’ proporcionada por USMCA, donde no cabe duda que la presencia descarnada de EUA en el ejercicio de la política económica en el país es cada vez más palpable. AMLO y su gabinete económico han respaldado incondicionalmente el T-MEC, que no es más que una continuación del proyecto neoliberal estadounidense, ahora impulsado por un intento de rejuvenecimiento industrial de aquel país. Sorprendentemente, esta administración se ha convertido en quizás la más franca de todas desde el inicio de la era neoliberal en 1982/83 en su promoción incondicional de la IED, especialmente la IED con base en los Estados Unidos. AMLO promociona públicamente a su “amigo”, el director de Blackrock (el fondo de inversión más grande del mundo) con quien se ha reunido en varias ocasiones. De hecho, sería difícil encontrar algún momento en la historia en el que la embajada de Estados Unidos haya trabajado más de cerca con un presidente mexicano. Y, vale decir, el embajador de EE. UU. ha sido muy claro en sus pronunciamientos: describe su papel en la “representación” de EE. UU. como nada más ni nada menos que el de un conductor para reposicionar y expandir la IED de EE. UU. en el país. En este mismo tenor, AMLO tampoco ha cuestionado de ninguna manera el poder de los más importantes gremios empresariales como la CCE, con quien se reúne de manera frecuente, mientras que cierra las puertas a negociaciones colectivas con organizaciones sindicales, campesinas e indígenas.

Cierto, la administración actual barajó la idea de la “autosuficiencia” energética como pilar de transformación para lo cual anuncia pomposamente que se trata de reestablecer el autoabastecimiento del petróleo y gasolina, consolidando a PEMEX en la competencia internacional sin cuestionar un ápice de su privatización aplicada en la reforma energética de 2013. En este terreno resulta mucho más impactantes destacar que, mientras EE. UU. y México han estado enfrascados en una “acalorada disputa” sobre el control que México puede ejercer sobre sus propias reservas de petróleo en alta mar, es una ironía considerable que los intereses del petróleo y el gas de Houston hayan consolidado su plan para convertir el costa del noroeste de México en un “hub” internacional de licuefacción de GNL para vender, en gran parte a Asia. Tan sólo como ejemplo, vale mencionar

que México completó, en los últimos años, un gran gasoducto de propiedad privada desde la frontera contigua al vasto campo de gas de esquisto Eagle-Ford en Texas hasta su costa (en el Mar de Cortés) cerca de Guaymas, Sonora. La capacidad de este nuevo gasoducto permitirá grandes flujos a una nueva planta de licuefacción de GNL en el puerto de Guaymas. De esta manera, los barones del gas con sede en Houston podrán enviar su gas de forma económica y rápida a la costa de México, luego enfriar/ comprimir el gas en GNL y enviarlo a Asia, particularmente Japón, Taiwán y Corea. Los gasoductos a Guaymas son controlados por TC Energy uno de cuyos accionistas importantes es BlackRock. Quizás por eso es que Laurence Fink ha sido tan bien recibido por el mandatario mexicano. Por su parte, una entidad con sede en Houston, LNG Alliance, construirá y operará la planta de Guaymas a través de su subsidiaria mexicana, Amigo LNG. LNG Alliance es el mayor productor de GNL en EE. UU., seguido de Shell Oil.

Este es tan sólo un ejemplo de los múltiples proyectos de inversión privada que están instalándose en la costa noroccidental del país para almacenar gas licuado proveniente de EUA y mandarlo a Asia. De hecho, ahora se acaba de anunciar una nueva planta en Coatzacoalcos para alimentar a Europa de gas producido en EUA. Seguramente, en esta condición, los medios empresariales y la clase política mexicana dirán (porque ya lo están anunciando) que México está aprovechando la guerra en ucrania y el bloqueo a lo energéticos rusos, para convertirse en un gran “exportador” de gas.

Por su parte, el sector del agro no es una historia muy diferente. Sabido por muchos es que la contrareforma agraria, la privatización de empresas estatales encargadas de producir y distribuir granos básicos en el país, el fin a los precios de garantía y el impulso del TLCAN desarticulaban por completo la estructura de producción y distribución de granos básicos en México, convirtiendo a este país en un importador neto de maíz, frijol, arroz, trigo, entre otros. De hecho, el día de hoy México es el mayor importador de maíz estadounidense del mundo, a pesar de ser cuna del maíz. Esto se debe esencialmente a la competencia desleal que implica comercial con EUA, donde los subsidios a los

productores colocan en completa desventaja a los campesinos mexicanos. Los únicos aventajados en México son los grandes productores de maíz blanco en el norte que tienen grandes extensiones de tierra y fuerte maquinaria. Pero aquí no se acaba la historia. Si bien desde el TLCAN México tuvo un déficit comercial en granos básicos con EUA, las cifras han cambiado recientemente y ahora, con bombos y platillos, en medio de la pandemia, se anunciaba desde la clase política y medios empresariales que México es superavitario en esta materia. Es porque el gobierno federal ha impulsado una estructura de producción nacional que proteja a los productores nacionales. Por supuesto que no. México se ha convertido en el mayor exportador agrario de EUA por haberse hiperespecializado en la exportación de cerveza, aguacate y berries. Tres productos agrarios que se encuentran totalmente controlados por empresas transnacionales, particularmente de origen estadounidense. Lo que se oculta es que las regiones productoras de aguacate y berries como Michoacán se encuentran sumergida en un escenario de violencia, en el cual el crimen organizado ha funcionado como mecanismo de terror para precarizar las condiciones de los pequeños productores y despojar la tierra a los pueblos originarios para procurar una mayor concentración de tierra en los grandes. Todo a costa de que una, o al menos un puñado de grandes corporaciones comerciales estadounidense guarden el grueso de la ganancia. De acuerdo con un estudio reciente de la universidad de Pensilvania, sólo el 4% del costo final de las fresas vendidas en EUA corresponde a la “remuneración” de los jornaleros agrícolas mexicanos.

Y que decir de la minería. El TLCAN, junto con la ley de inversión extranjera y la ley minera de los años noventa, abrieron el país a la explotación despiadada de metales preciosos, tanto por empresas extranjeras como por grandes gangsters mineros de origen mexicano como Biller, Larrea y Slim. 11% del territorio mexicano fue concesionado para la exploración y explotación minera y, aprovechando la alta composición de capital y los elevados precios de los minerales preciosos durante la primera década del siglo XXI, México fue sacudido (como el resto de AL) por una ola de operaciones de minería a cielo abierto. Desde 2014 la actividad minera ha caído, por que también han

caído los precios. En este contexto AMLO anunció que no abrían más concesiones. Sobre esto, lo primero que habrá que decir es que la asignación de concesiones ya venía en picada desde el gobierno de Peña Nieto, y en segundo lugar, el anuncio de freno a las concesiones sólo ha sido eso, un anuncio de las mañaneras, más no una política y un instrumento. Varias concesiones han entrado en operación durante el gobierno actual de AMLO, a pesar del desacuerdo de las comunidades y toda la destrucción que puede causar esta actividad a nivel social y ambiental. La actividad minera y toda la política económica que la fomenta no ha sido cuestionada ni por un milímetro. Revertir la ley minera de 1993 que abrió la puerta a este modelo extractivo exportador no parece estar en el orden del día de la presidencia.

Y sobre el sector clave de la economía mexicana, la industria automotriz, que se puede decir? La transformación anunciada significa poco, o nada, cuando se observan esta actividad. Ya se ha demostrado de muchas maneras que la llamada potencia exportadora automotriz mexicana, en realidad no tiene ninguna base industrial endógena. La fuerza motriz de la estructura económica del sector es una lógica maquiladora de agregación dependiente de importaciones de componentes para ser ensamblados en México y reexportados a EUA, con control pleno de capitales extranjeros y diseñadas para operar procesos intensivos en mano de obra y de bajo valor agregado.

Lamentablemente, para aquellos que consideran al TMEC como una oportunidad, los indicadores no son alentadores. En 2022, EE. UU. se ha movido rápidamente para promover la relocalización de su sector automotriz a medida que se reestructura masivamente para hacer la transición a la producción de vehículos eléctricos. En este escenario, la administración de AMLO a fines de 2022 ha sido insistente en pegarse al giro productivo de los EE. UU, aprovechando las ventajas que puede generar la guerra comercial con China, y de esta forma apoyar la relocalización/localización (nearshoring) cercana en de la industria manufacturera, particularmente del sector de microelectrónica avanzada.

El auge industrial de China generó en EE. UU. una rápida respuesta defensiva y ofensiva: EE. UU., desde una lógica imperial, anunció 550 mil millones de dólares a ser invertidos entre 2022-2026 para modernizar su infraestructura industrial y casi 53 000 millones de dólares en “capital inicial” para provocar inversiones colaterales masivas del sector privado en el sector de la microelectrónica. Esta nueva tendencia se ve con enorme optimismo por parte de las secretarías del gobierno federal. Bajo esta mirada, parece que ahora México se convertirá en una gran potencia exportadora de semirprocesadores. México nunca a producido semiconductores, pero parece que ahora, nada mas que con el magia que pueda proveer la mano invisible y las inversiones extranjeras, México se colocará como el mayor proveedor de chips para EUA.

Pero claramente, como ha sucedido con la industria automotriz y aeronáutica México participará acomodándose con sus bajos salarios a los efectos de reflujo de capital a través de la deslocalización cercana, a medida que las grandes ETN productoras de microchips construyan instalaciones en EUA de producción costosas y fuertemente subsidiadas por el estado en los EE. UU. Careciendo totalmente de capacidades tecnológicas endógenas, operando lejos de las fronteras de un sistema nacional de innovaciones, el aumento masivo de inversiones en la producción de electrónica avanzada no se extenderá a México sino en forma de maquiladora. La industria de los semiconductores es profundamente heterogénea y México, sin política industrial nacional, con salarios precarios, sin condicionamiento a la IED, con un aparato industrial totalmente atrofiado, quedará manufacturando y especializado en los eslabones más debiles de esta cadena: los segmetnos más bajos en valor que son ensamblaje, prueba y empaque de microchips. Las nuevas líneas de ensamblaje con mano de obra barata serán aclamadas como el supuesto presagio de una participación cada vez más profunda de México en la manufactura avanzada. Sin embargo, para 2022 el discurso del escalamiento resulta más que desgastado en un país que llevó más de 40 años envuelto en un patrón manufacturero exportador que sólo ha fragmentado el aparato productivo y precarizado a la clase trabajadora. Para los exponentes, el espejismo del industrial upgrading nunca se materializó.

Si pudiéramos aceptar que el neoliberalismo ha terminado, todo parece indicar que la llamada cuarta transformación se parece más bien a la gran transformación que explicó impecablemente Polanyi al referirse a la plena descomposición que causa la incorporación de toda la vida social a la lógica del mercado, a lo que él denominó el Molino Satánico. Hace 4 años no nos hubiéramos imaginado el grado de anexión de México al control de EUA que hoy está tomando su curso.

Pero la historia avanza, y después de tres años de reflujo, hoy vemos que nuevamente se escucha el clamor de la lucha en las calles de los diferentes rincones del país, contra la militarización, por la justicia y aparición con vida de los estudiantes desaparecidos de ayotzinapa, de las madres que con sus uñas buscan a su hijos desaparecidos, contra el despojo de los pueblos originarios, contra la precarización del trabajo, contra la violencia feminicida, por la educación digna, publica y gratuita, etc, etc. Ahí se definirá el devenir de los próximos años en este país.